

# Las políticas climáticas y ecológicas, sacudidas por la guerra en Ucrania

ADRIANA MAYOR

«**H**a circulado por ahí la extraña narrativa de que, debido a los desafíos que se avecinan para Europa a causa de la guerra de Putin contra Ucrania, estamos dando un paso atrás en nuestras ambiciones y en nuestros programas. Nada más lejos de la realidad». Así comenzaba su discurso en la COP27 el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que inmediatamente después de arrancar con ese *disclaimer* enumeró las nuevas políticas climáticas adoptadas por la Unión Europea en los días previos o durante la cumbre del clima de la ONU que en diciembre de 2022 acogía la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

«En las dos últimas semanas hemos tomado tres decisiones: sobre los automóviles, sobre lo que debe hacer cada Estado miembro para compartir el esfuerzo, y sobre cómo potenciamos la naturaleza para que sea un mejor sumidero de carbono. Y todas ellas nos permiten afirmar que vamos a ir incluso más allá del objetivo que nos hemos fijado de reducir al menos un 55% las emisiones de aquí a 2030. No debe haber malentendidos: la UE está muy comprometida con este objetivo», aseguró Timmermans.

Sin embargo, la “extraña narrativa” a la que se refería el diplomático no estaba poco fundada: tras la invasión rusa de Ucrania, el apoyo a los combustibles fósiles para paliar la subida del precio del carburante, el retorno de Europa al carbón, las inversiones en nuevas infraestructuras gasísticas, o la apuesta por el gas de *fracking* en EEUU no prometían resultados muy alentadores para el clima.

En 2022, los subsidios a los combustibles fósiles llegaron a los 1,1 billones de dólares, la cifra más alta jamás registrada, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía.<sup>1</sup> La cantidad de ayudas a las energías sucias no solo batió

<sup>1</sup> *World Energy Outlook 2022*. Resumen ejecutivo, Agencia Internacional de la Energía (IEA), 2022, disponible en: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/executive-summary?language=es>

todos los récords en 2022 sino que duplicó el dato de 2021, que ya era cinco veces el de 2020, según la AIE.

Diferentes países de la Unión Europea se lanzaron a compensar a los ciudadanos por los altos costes de la energía. En España se movilizaron hasta 660 millones de euros para ayudas directas para que agricultores, ganaderos y pescadores y, en paralelo, y aplicó una bonificación a los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera, entre otras medidas. Medidas similares se plantearon en diversos países.

En EEUU, el gobernador de California llegó a proponer conceder una prima de 400 dólares a cada propietario de un automóvil. La propuesta, que preveía hasta

**Más de la mitad de las nuevas subvenciones a los combustibles fósiles surgidas en 2022 lo hicieron dentro de la Unión Europea**

dos reembolsos de 400 dólares por coche, «para que los propietarios puedan mantener a familias con más de un vehículo en uso», no contemplaba un tope de ingresos, por lo que todos los ciudadanos de California –desde los multimillonarios de Silicon Valley hasta las personas de clase trabajadora– podrían en teoría recibir la prima. La

idea, argumentaba el Gobernador, era «incluir a todos los californianos que se enfrentan a precios más altos debido al coste del petróleo».

Con todo, más de la mitad de las nuevas subvenciones a los combustibles fósiles surgidas en 2022 lo hicieron dentro de la Unión Europea, según la AIE. Los 27 gastaron, en conjunto, 349.000 millones de dólares solo en 2022 para proteger a los ciudadanos de la volatilidad de los precios de la energía.

La propia AIE avisó en su informe de que esa escalada de gastos «contrasta fuertemente con el Pacto Climático de Glasgow, que en noviembre de 2021 instaba a los países a “eliminar progresivamente... las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles, proporcionando al mismo tiempo ayudas específicas a los más pobres y vulnerables”».

«Nuestro análisis muestra que muchas de estas medidas gubernamentales no estaban bien orientadas y, aunque pueden haber protegido parcialmente a los consumidores de unos costes desorbitados, mantuvieron artificialmente la competitividad de los combustibles fósiles frente a las alternativas de bajas emisiones», señalaron por escrito desde la AIE.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibidem*.

«Tenemos el capital político enfocado, como era previsible, más en el conflicto y menos en los objetivos climáticos», comentó por su parte la especialista en cambio climático del Instituto Elcano, Lara Lázaro, en el podcast Conversaciones Elcano.<sup>3</sup> «Tenemos una respuesta de la Unión Europea con RePowerEU, que ha supuesto tanto una diversificación de fuentes –que es positivo, con un apoyo a las renovables– como también una diversificación de proveedores con una búsqueda de gas natural licuado de EEUU para poder pasar el invierno, la búsqueda de acuerdos en otros países, un apoyo a los combustibles fósiles y a las infraestructuras y con un potencial de recursos varados», lamentaba.

La pérdida de la UE de su principal suministrador energético convirtió al 2022 en «el año de la verdad de la política energética y climática europea», analizaron a posteriori los expertos de esta institución de investigación en geopolítica.<sup>4</sup> «La interacción de las crisis energética, alimentaria, de inflación y de deuda, la invasión rusa de Ucrania, el empeoramiento de las perspectivas económicas y las tensiones geopolíticas entre los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero (China y EEUU) redujeron el capital político dedicado a la acción climática», apuntaron.

## El gas y la nuclear, energías “limpias”

En marzo de 2022, la UE introdujo, pese al rechazo de los ecologistas, el gas y la nuclear en el Reglamento Delegado que establece un marco para facilitar las inversiones sostenibles, la conocida como “taxonomía europea” que trata de «orientar la inversión privada a las actividades necesarias» para descarbonizar el Viejo Continente.

En abril, la red Gas no es la solución y 35 organizaciones de la sociedad civil suscribieron una carta abierta en la que pidieron a la UE que no usara la crisis de Ucrania como excusa para producir más combustibles fósiles, en especial gas, que solo servirán para agudizar la crisis climática.

<sup>3</sup> Lara Lázaro, «Vamos tarde para luchar contra el cambio climático», Conversaciones Elcano, podcast Spotify, diciembre 2022, disponible en:

<https://open.spotify.com/episode/6JRtsdwC4Az9Kb2X1Lgjsj?si=6463f6df46144985&nd=1>

<sup>4</sup> Gonzalo Escribano, Lara Lázaro e Ignacio Urbasos, *Energía y clima en 2023: desacoplarse de Rusia conciliando seguridad energética y ambición climática*, Real Instituto Elcano, 10 de enero de 2023, disponible en: <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/energia-y-clima-en-2023-desacoplarse-de-rusia-conciliando-seguridad-energetica-y-ambicion-climatica/>

Advertían de que los instrumentos de los que se estaba dotando la UE, como la hoja de ruta RePowerEU o el acuerdo con Estados Unidos para aumentar el suministro de gas natural licuado (GNL), «si no se aplican adecuadamente podrían consolidar la dependencia a los combustibles fósiles en lugar de suponer un avance considerable para la transición energética justa».<sup>5</sup>

**La sociedad civil suscribió una carta abierta en la que pidió a la UE que no usara la crisis de Ucrania como excusa para producir más combustibles fósiles**

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se sumó también en la COP27 de Sharm el Sheij a las críticas por los retrocesos en política climática que se estaban dando en el Norte Global como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania.

Argüía que la invasión rusa había sacado a la luz «los riesgos de la dependencia de los países a los combustibles fósiles» y pedía que estas crisis urgentes no sirvieran como “excusa para la recaída” o el ecoblanqueo (*greenwashing*). «En todo caso, son una razón para una mayor urgencia, una acción más fuerte y una rendición de cuentas efectiva».

## Reducción de emisiones de CO<sub>2</sub>

Lo cierto es que, incluso con la vuelta de la UE al carbón y estos apoyos a los combustibles fósiles, el grupo de los 27 logró reducir sus emisiones en un 2,5% respecto al 2021, y casi todos los estados miembro rebajaron su demanda de energía durante el pasado invierno.

De media, la demanda cayó un 7% en relación al año anterior por esas fechas, lo que hizo que la generación a partir de combustibles fósiles descendiera un 12%. La energía de carbón a finales de 2022 cayó un 11% y la de gas un 13% (siempre respecto al invierno de 2021).

Según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), las emisiones de la UE en noviembre alcanzaron su nivel más bajo en al menos 30 años, al igual que el consumo de gas, el carbono del sector eléctrico y la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles.

<sup>5</sup> Gas no es la solución, «Carta abierta a la sociedad civil», 27 de abril de 2022, disponible en: <https://suelosolar.com/noticias/biogas/espana/27-4-2022/gas-no-es-solucion-carta-abierta-sociedad-civil>

A nivel internacional, en el cómputo global las emisiones subieron. Aumentaron exactamente un 0,9% (321 millones de toneladas de CO<sub>2</sub>), según el informe anual de la AIE.<sup>6</sup> La subida, no obstante, fue menor de la que se esperaba, teniendo en cuenta la crisis energética y el hecho de que las políticas climáticas hubieran pasado a un segundo plano a causa de la guerra.

En EEUU, el mayor responsable histórico del calentamiento global, la adopción del paquete legislativo para frenar la inflación en clave climática –bautizado como *Inflation Reduction Act* (IRA)– supuso también un gran alivio para todos los que habían seguido desde el inicio de la legislatura el proceso de negociación dentro del partido demócrata respecto a la política climática. Ese proceso se vio reiteradamente entorpecido por el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, un demócrata pero con una fuerte conexión a la industria del carbón y con la campaña con más donaciones provenientes de la industria de los combustibles fósiles que la de ningún otro senador estadounidense.

Pero en agosto de 2022 el proyecto legislativo se convertía por fin en ley, para sorpresa de ambientalistas, periodistas o incluso legisladores que habían seguido de cerca la evolución de la política climática de Biden. El IRA, según calculan los análisis recientes, podría reducir las emisiones de gases invernadero de EEUU entre un 32% y un 40% para 2030 en comparación con los niveles de 2005. El paquete, la mayor pieza de legislación climática de la historia del país, destina casi 370.000 millones de dólares de fondos federales a las energías limpias, fondos que se canalizarán a través de incentivos fiscales, subvenciones y garantías de préstamos.

Así, la aceleración de la transición energética hacia fuentes renovables podría apuntar a una mayor acción climática tras la guerra en Ucrania. Sin embargo, en paralelo a estas medidas y reducciones de gases de efecto invernadero anunciadas a bombo y platillo han prosperado acuerdos para invertir en infraestructuras de combustibles fósiles por parte de las dos potencias que se disputan el liderazgo climático global.

## La apuesta europea por el gas en África

Europa se ha visto en la encrucijada de recortar su dependencia del gas ruso, y las organizaciones ecologistas han sido las primeras en exigir el fin de esa compra

<sup>6</sup> CO<sub>2</sub> Emissions in 2022, IEA, marzo 2023, disponible en: <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022>

de energía fósil de Moscú. El argumento era doble: por un lado, argüían que está demostrado que estos combustibles comprometen la habitabilidad del planeta ya recalentado y, por otro, que con estos acuerdos de compra de gas ruso los estados

**En ese afán de cortar los lazos con Rusia, los países europeos recurrieron a África para desplegar allí redes gasísticas con las que aprovisionarse**

estaban contribuyendo a financiar el conflicto en Ucrania. «La Unión Europea ha destinado más de 130.000 millones de euros en la compra de carbón, petróleo, uranio y gas rusos desde que comenzó la guerra», precisaron desde Greenpeace.<sup>7</sup> «Según datos de Europe Beyond Coal, si los fondos gastados en combustibles rusos se hubiesen empleado en la transición energética ciudadana, en solo este

año tendríamos más de 1,7 millones de casas fotovoltaicas o 600.000 viviendas bien aisladas o 2 millones de nuevas calefacciones eficientes», agregaron.

Pero en ese afán de cortar los lazos con Rusia, los países europeos recurrieron a África para desplegar allí redes gasísticas con las que aprovisionarse.

En mayo de 2022, el canciller alemán Olaf Scholz acudió a Senegal para fomentar la explotación de gas en el país africano, en un plan de cooperación bilateral que la Alianza Popular Germano-Senegalesa para la Justicia Climática criticó al considerar que estos proyectos de combustibles fósiles no están alineados con los objetivos climáticos.

En junio, Egipto, la UE e Israel llegaron a un acuerdo para impulsar las ventas de gas natural licuado. Angola firmó asimismo un trato de compra-venta de gas con Italia, país que repitió la operación con la República Democrática del Congo y con Argelia, con quien mantiene un acuerdo gasístico valorado en 4.000 millones de dólares.

En septiembre, el responsable de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, animó al gobierno de Mozambique a acelerar un programa de gas «que ha provocado el desplazamiento de miles de personas y alimentado la insurgencia violenta y el conflicto», aducen desde Don't Gas Africa.<sup>8</sup> Esta campaña, compuesta de diversos gru-

<sup>7</sup> «Mapa de la destrucción medioambiental en Ucrania: a la tragedia humana se suma la destrucción medioambiental», Greenpeace España, noticia en web, 21 de febrero de 2023, disponible en: <https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/mapa-de-la-destruccion-medioambiental-en-ucrania-a-la-tragedia-humana-se-suma-la-devastacion-natural/>

<sup>8</sup> «Stop Europe's Dash for Gas in Africa. Letter to European Leaders», Don't Gas Africa, disponible en:

pos de la sociedad civil en países africanos, exigía en una misiva a los mandatarios europeos que frenaran sus inversiones en infraestructuras de gas en el continente africano. «Cualquier nuevo desarrollo gasístico agravaría el impacto climático en la región menos responsable de la crisis, y agravaría los efectos devastadores que la extracción de gas tiene sobre los medios de subsistencia, la salud pública, los derechos humanos y la biodiversidad», comentaban en el escrito.

## Nuevos proyectos de petróleo y gas en EEUU

EEUU, por su parte, ha avivado sus propias polémicas entre activistas climáticos, que ahora están en pie de guerra frente al controvertido proyecto petrolero Willow de ConocoPhillips, que cuenta con el visto bueno del Gobierno para perforar durante décadas el North Slope de Alaska, en la Reserva Nacional de Petróleo, que pertenece al gobierno federal.

Si bien las licencias a este proyecto se concedieron en 2020, con la administración de Donald Trump, el ahora presidente estadounidense, Joe Biden, ha dado luz verde a tres de las cinco plataformas de perforación que había permitido Trump, lo que supone que la empresa podrá extraer al menos el 90% del petróleo que pretendía obtener.

La polémica más reciente ha llegado cuando la Administración ha concedido un permiso elemental para poner en marcha la construcción del oleoducto Mountain Valley Pipeline, en Virginia Occidental, una iniciativa defendida por el senador de este estado, Joe Manchin, desoyendo las advertencias de los especialistas climáticos y pese a la oposición de los ecologistas.

## La protección de la biodiversidad

La invasión rusa en Ucrania y su consecuente crisis energética no es el único factor que ha determinado este giro en las políticas energéticas y en la acción climática que se vio en la cumbre del clima. También la pandemia por el COVID-19 supuso un parón importante para la transición ecológica, ya que la crisis sanitaria

ocupó el primer puesto de las prioridades a corto plazo. Las cumbres internacionales del clima y de la biodiversidad se pospusieron. En el caso de la cumbre del clima COP26, que debía suceder en 2020, se retrasó un año y tuvo lugar en 2021 en Glasgow (Reino Unido).

Pero la COP15 de biodiversidad no llegó hasta finales de 2022, cuando se celebró en Montreal (Canadá). El acuerdo firmado entre los países de la ONU para proteger al menos el 30% de la biodiversidad para 2030, no obstante, fue bienvenido por buena parte de los grupos conservacionistas internacionales. El tratado, que calificaron como “histórico”, establece cuatro metas de aquí a 2050 y veintitrés objetivos para 2030, con una movilización de al menos 200.000 millones de dólares al año para la recuperación y protección de los ecosistemas.

La biodiversidad ha podido celebrar otros avances en este último año: el acuerdo BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction, en inglés), un instrumento internacional jurídicamente vinculante enmarcado en la

**En EEUU los activistas climáticos protestan contra el proyecto petrolero Willow de ConocoPhillips para perforar durante décadas el North Slope de Alaska**

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Tras cuarenta años desde que se firmara UNCLOS, por primera vez la comunidad internacional consiguió regular en este marco la protección

de la biodiversidad en aguas internacionales, que comportan el 60% de la superficie oceánica del planeta.

Por su parte, la UE ha tramitado de manera excepcionalmente veloz el nuevo Reglamento europeo para prevenir la deforestación importada, conocido como EUDR. Esta política fue aplaudida por los ecologistas pese a no ser la mejor de las propuestas planteadas, ya que, por ahora, excluye de su ámbito de aplicación a muchos ecosistemas vulnerables a la deforestación ligada a los cultivos de productos importados en Europa, así como a materias primas clave como es el maíz.

Con todo, los ambientalistas y defensores de los derechos humanos valoran que el nuevo Reglamento supondrá un alivio para la deforestación en países como Brasil o Indonesia, ya que toda la palma aceitera, el cacao, la soja, la madera, el café, el vacuno, el caucho y derivados que se comercializan en la UE solo podrán



cruzar las fronteras comunitarias si pasan los controles que garantizan que su cultivo no ha acarreado deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, en el contexto de crisis energética agravada por el conflicto bélico europeo, la UE ha querido apostar por otra fuente de energía que contribuye a la pérdida de biodiversidad: los biocombustibles.

En un principio, la guerra en Ucrania –o, más bien, la interrupción en el suministro de alimentos en que se tradujo– avivó el debate en Europa sobre el uso de la tierra que acaparan los cultivos para biocombustibles.

En marzo, la revisión de la directiva de renovables acordada en la UE eleva al 29% la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final en el sector del transporte, para lo que establece un subobjetivo combinado vinculante del 5,5% «para los biocombustibles avanzados (generalmente derivados de materias primas no alimentarias) y los combustibles renovables de origen no biológico (principalmente hidrógeno renovable y combustibles sintéticos a base de hidrógeno) en la cuota de energías renovables suministradas al sector del transporte».

Desde las asociaciones ecologistas advierten que este tipo de combustibles, aunque en teoría no debe provenir de cultivos alimentarios como la soja y la palma, «con lo cual ya nos quitamos mucha deforestación asociada y emisiones», encierra otros riesgos, sugiere desde Ecologistas en Acción la especialista Marta García Pallarés.<sup>9</sup>

«Los biocombustibles de palma generan tres veces más emisiones que el diesel fósil y, los de soja, el doble», recuerda García Pallarés, y apunta que los biocombustibles avanzados «ahora mismo tienen bastantes limitaciones, por dos cuestiones: por ser tecnologías inmaduras y por el tema de la disponibilidad.

Por ejemplo en el caso de los biocombustibles a base de residuos, no es realista pensar que el sector transporte pueda abastecerse de ellos, las cuentas no dan», añade.

---

<sup>9</sup> Declaraciones en conversación con la autora.

Por otro lado, dependiendo del tipo, los biocombustibles avanzados generan un tipo de problema y otro, advierte García Pallarés. «Ya hemos visto que el aumento de la demanda de grasas animales derivadas de la ganadería industrial para el sector de la aviación están provocando que otras industrias que utilizan este tipo de grasas se vayan a ver obligadas a mirar al aceite de palma... Mucho más insostenible por la deforestación asociada y las emisiones GEI que genera».

Además, observa que las grandes petroleras «hacen una publicidad engañosa de forma constante con este tema, y hablan de que usan biocombustibles para su estrategia de desacarbonización y emisiones netas cero en 2050, pero muchas veces no queda claro qué tipo de biocombustibles están utilizando».

Es, denuncia García Pallarés, «una manera de confundir a las personas consumidoras, que no tienen por qué saber del tema y por tanto podrían estar basando sus decisiones sobre falsas creencias de la compañía en cuanto a su implicación en la desacarbonización».

Así, la guerra ha acelerado las políticas climáticas y la transición energética mediante medidas en los grandes estados o grupos de estados emisores, como Re-PowerEU en la UE o el IRA en EEUU, pero los esfuerzos que se han puesto en marcha para acabar con los vínculos con Moscú no han evitado que en paralelo se hayan adoptado acuerdos que contradicen las indicaciones de la comunidad científica para afrontar la crisis ecológica, y en algunos casos se han traducido en soluciones que no terminan de convencer ni a entidades poco sospechosas de ser “antisistema”, como la AIE o la ONU, ni a los ecologistas, ni a centenares de organizaciones de la sociedad civil en los países afectados por estas apuestas “verdes” para afrontar las consecuencias del conflicto.

**Adriana Mayor** es periodista especializada en cuestiones ambientales y ha colaborado en *Green European Journal*.

